



Diccionario político y social del siglo XIX español

Javier Fernández Sebastián
Juan Francisco Fuentes (dirs.)

Alianza Editorial

rara definitivamente del nombre de *exaltado* que todavía a veces le acompañaba: «Eso de exaltado —afirma— es muy malsonante», pues sugiere «extrañeza, repugnancia [...], falta de tino y cordura»; en cambio, progreso, «sobre todo progreso legal», evocaba respetabilidad y orden, que eran virtudes inexcusables en un partido de gobierno, como aspiraba a serlo el progresista («Situación política», 1840; OC, VI, 58).

La convivencia entre ambas fórmulas se mantuvo aún durante la Regencia de Espartero, pero el declive de *exaltado* era ya irreversible. Mientras se iba afianzando, por una parte, la voz *progresista*, parcialmente despojada del sentido romántico y democrático que tuvo *exaltado*, por otra, cobraban cada vez más fuerza los términos *demócrata* y *republicano* como expresión de una izquierda liberal, próxima al incipiente movimiento obrero, que podía manifestarse ya sin eufemismos.

Véase también: CONSTITUCIÓN, LIBERALISMO, PROGRESISTA, PUEBLO, REVOLUCIÓN.

FEDERALISMO

Javier Ayzagar
y Gonzalo Capellán de Miguel

El federalismo irrumpe en el ámbito del pensamiento político moderno vinculado al menos a dos ideas diferentes. En uno de sus escenarios lo encontramos, en la filosofía de Kant, relacionado con la idea de una «paz perpetua» que es deseable para el mapa universal de los Estados. Así, frente a la lucha permanente a que los Estados-nación parecían abocados en el siglo XIX, Kant (y luego otros autores) verán en la fórmula federal un modo de superar la anarquía internacional. Junto a esa versión del federalismo se desarrolla desde finales del siglo XVIII la idea del Estado federal. Los artículos que Madison, Jay y Hamilton publicaron en *The Federalist* entre 1787 y 1788 sirvieron no sólo para decantar finalmente la opinión de la naciente República Norteamericana del lado de la causa federal, sino también para articular un modelo político de enorme trascendencia posterior entre los teóricos europeos. Además, la idea federal se distanciaba en la práctica de aquel otro principio que hasta entonces se había tomado (y se seguirá tomando) como equivalente: la confederación (que ahora se planteaba como una idea más bien desintegradora, frente a la unidad que garantizaba la organización de acuerdo con parámetros federales). El ejemplo norteamericano servirá para mostrar las virtudes del federalismo a la hora de articular un poder central con ciertas

atribuciones generales en armonía con los poderes de cada Estado miembro de esa federación, conservando su autonomía en numerosas esferas de acción concreta.

Muy diferente (y peculiar, por tanto) es la interpretación que del federalismo se va a realizar en el caso español. Desde un principio, el universo federal va a aparecer aquí muy vinculado a los elementos localistas y juntistas que afloran con el liberalismo, para más tarde identificarse prioritariamente con el credo republicano (careciendo de importancia en el plano teórico la versión tradicionalista de la monarquía federada). La crisis y el vacío de poder en que vive la sociedad española entre marzo de 1808 y septiembre de 1810 condujo a la necesidad de establecer una resistencia organizada que ofreciera un nuevo entramado de poderes territoriales como alternativa institucional frente al régimen de José I. La singular proliferación de *juntas* en todo el territorio controlado por los patriotas dará paso a una atomización horizontal del poder, a una «federalización» operada por los distintos poderes depositados en las Juntas territoriales que sustituyen a la antigua autoridad del monarca, en cuyo nombre actúan y de cuya legitimidad y soberanía se consideran depositarias: «Juntas Supremas de Gobierno, Juntas patrióticas, Juntas de verdaderos españoles, a vosotros se dirige mi voz: en vuestras manos está el bien y el mal, en vuestras manos está la soberanía» (*Diario de Badajoz*, 17-VI-1808, 1). El hecho de que el poder de las Juntas fuese durante largo tiempo el único verdaderamente institucionalizado y operativo en el bando insurgente y la ausencia efectiva de la autoridad regia suponen la presencia de un poder de naturaleza monárquica regentado por las Juntas en ausencia de su titular. Un poder asumido merced a circunstancias excepcionales y nunca como resultado de un programa o de una idea constitucional de federalización del Estado. La creación de la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, en septiembre de 1808, puso fin a las tendencias federalizantes de las juntas territoriales y las vació de la soberanía de la que hasta entonces habían disfrutado de hecho. A la altura de 1810 se habla ya específicamente de *federalismo* como el resultado de «mantener unas leyes particulares para cada provincia». Algo que, según la Regencia, sólo podía tener «perniciosas resultas».

El periodo constituyente abierto en Cádiz propiciará el planteamiento de la cuestión federal en lo que se refiere a la relación de la metrópoli con sus territorios americanos. Efectivamente, «la cuestión americana» surge con fuerza en el momento que el constituyente gaditano se plantea el problema de la definición de su territorio. Cuestión esta que si en principio pudiera parecer sencilla, no lo era en absoluto para un Estado que quiere fundarse constitucional no sólo sobre la pervivencia de antiguas costumbres feudales, sino también por el deficiente conocimiento que de la realidad americana tenían los diputados españoles metropolitanos en cuestiones instrumentales como la misma geografía o la simple delimitación de los confines del dominio español en América. Las Cortes gaditanas quedarán divididas entre los fervientes partidarios de un diseño constitucional de corte federal —o cuando menos «autonómico»— en el que los territorios americanos pudieran encontrar acomodo en sus relaciones con la metrópoli (la gran mayoría de los diputados americanos), los partidarios de posiciones más o menos

independentistas y el bloque de los diputados españoles metropolitanos abiertamente favorables a un diseño uniformizador y centralizado. El temor a que la afirmación de la diversidad de poderes federales fuera aprovechada por los partidarios del absolutismo para abanderar la pervivencia misma de la diversidad feudal —temor que les impedía distinguir entre las demandas federalistas de los diputados americanos y las filias foralistas de los diputados peninsulares más refractarios a los principios de unidad e igualdad de derechos de todas las provincias— decidió, finalmente, al bloque de diputados españoles metropolitanos a dibujar un diseño constitucional unitario como garantía frente a la dispersión y a la diversidad propias del régimen feudal.

En el federalismo se dio también una dimensión «externa» que, aplicando el principio federal, conducía desde el hombre como célula mínima hasta el Universo o la Humanidad toda, fraternalmente vinculada por nexos de amor y libertad. Se trata de una versión estrechamente vinculada al pensamiento masónico en cuyo seno se conservaron tales ideas durante los años de negación de las libertades asociativas. Una conexión que se percibe con toda nitidez en la organización de la sociedad secreta La Federación (Madrid, 1837). Su estructura reproduce la de una República federal con Cantones federales y una Federación Central, cuyas relaciones quedaban sujetas a una ley federada. Entre los principios básicos que todos sus miembros se comprometían a defender figuraba éste: «Juro: prestar toda clase de servicios que se me ordenen, sacrificando mi vida y todo cuanto me pueda pertenecer para que prosperen y se difundan los principios regeneradores de la Federación Universal» (cit. Zavala, 1971, 325). Años después, el krausismo aspirará también a esa alianza global de la Humanidad. El propio Krause había visto en la federación de Estados europeos una fase crucial intermedia hacia esa meta (Querol, 2000, 449-470), y Ahrens hizo de la idea federativa la clave del Derecho público internacional (*Enciclopedia Jurídica*, 1880, III, 353). Sobre tales bases teóricas, los krausistas españoles creyeron que sería factible construir esa unión armónica universal, partiendo del municipio, pasando por la nación y propiciando la progresiva integración de los Estados.

La «Unión Ibérica» será una de las utopías más anheladas por los federales españoles del ochocientos. En 1832, el exiliado Ramón Xauradó y Fábregas publicó su folleto *Bases d'une Constitution politique*, cuya repercusión será muy importante cuando se reedite en Barcelona en 1868, en un momento de máxima importancia de la cuestión federal en el seno del movimiento republicano. En 1833, Antonio Puigblanch escribirá en Londres sus *Opúsculos gramático-satíricos del Doctor Antonio Puigblanc contra el doctor Joaquín Villanueva escritos en defensa propia, en los que también se tratan temas de interés común*, proponiendo una «regeneración política de la España pendiente, como medio único, de un gobierno confederado». Aquí se utiliza el término «confederado», pues durante gran parte del siglo XIX no se establece distinción alguna entre «federación» y «confederación». Aún en 1902, el *Diccionario General Etimológico de la Lengua Española* los considera términos sinónimos: se remite de la voz «Federación» a la de

«Confederación» y se define como «hacer alianza, liga o unión entre otros. Más comúnmente se usa como recíproco».

Entre 1834 y 1843, el creciente protagonismo de los republicanos y diversos acontecimientos políticos —sustitución de la Constitución de 1812 por la de 1837, disolución de las Juntas por el Gobierno nacional, abdicación de María Cristina y movilización contra la ley municipal de junio de 1840— contribuirán a una mayor presencia de la cuestión federal en el debate político, hasta el punto de que el periódico *El Conservador* llegará a definir la situación de la sociedad española desde 1840 como una mera «agregación de estados federales» (12-XII-1841). En algunos periódicos republicanos de esta época, como *El Huracán* y *El Peninsular*, podemos encontrar intentos más o menos logrados de definir el federalismo (véase Trías y Elorza, 1975, sobre todo, 332-341). Tiene su lógica, pues, que el *DRAE* recoja por vez primera el término *federal* en su edición de 1843. Pero su contenido, así como el de otros términos de su campo semántico, como «federalismo», «federación», «confederación», «federar» y «confederar», está apegado a su sentido etimológico de «alianza» o «unión mediante pacto», herencia de los usos institucionales de la Corona de Aragón, alejados, ciertamente, de una concepción moderna de los Estados federales y confederales con mayor o menor reserva de soberanía de los Estados territoriales respecto a la estructura de poder de la Unión o de la Confederación. En el lenguaje común, sin embargo, la idea federal no había perdido ciertas connotaciones peyorativas, ni había desaparecido el recelo entre buena parte del liberalismo hacia sus peligros disolventes. Así, podía escribir Larra en 1835 que el episodio juntista de aquel año constituía la prueba más contundente de que «el federalismo político no es ya de temer en un país donde entre tantos peligros ha sabido salvarse la unidad nacional» (Ruiz Otín, 1983, 367). Por estos años se halla vigente aún el doble sentido que —según Seoane— el federalismo adquirió durante el primer constitucionalismo; es decir, de un lado su identificación con «provincialismo», y de otro su antagonismo con respecto a la unidad nacional (cit. Battaner, 1977, 127).

En 1845 se publica en Cádiz el *Diccionario político o enciclopedia del lenguaje y la ciencia política*, en el que la voz «federalismo» tiene un claro sentido negativo: «La constitución de los anglo-americanos ha servido de modelo a las repúblicas que se han formado en el nuevo continente. [...] La experiencia ha hecho ver, por una y otra parte, que no había otro ejemplo peor que seguir». Sin embargo, esta tradición interpretativa en un sentido negativo del término federalismo y sus derivados empieza a enmendarse a medida que la revolución social de 1848 extiende por toda Europa su espíritu de radicalismo democrático. En España empieza a consolidarse una corriente que entronca democracia y libertades con federalismo en general y con el ejemplo norteamericano en concreto. Para Castelar o Garrido, por ejemplo, la meta política va a ser desde entonces la República federal democrática. Una idea, por otro lado, que rompía con el origen pactista (*foedus*) del federalismo desde el momento en que el concepto democrático del poder constituyente elimina el fundamento federal o pactista del Estado, como observará Carl

Schmitt en su momento. Además, la filosofía federalista va a adquirir una segunda carga de significado más allá de la simple constitución federal del Estado, para extender su campo semántico hasta el terreno social. La recepción del pensamiento de Proudhon y su difusión por parte de Pi y Margall llevarán a una interpretación del federalismo en clave social, como un instrumento al servicio de la emancipación de los más desfavorecidos y de eliminación de los elementos más tradicionalmente injustos e impopulares del orden social vigente, tales como las quintas, los consumos o un sistema de propiedad de la tierra que la desamortización no había hecho sino empeorar. De este modo, cuando llegue la propicia (y determinante para el desarrollo del federalismo en España) etapa del Sexenio democrático, las ideas federales aparecerán revestidas de un valor positivo. Esta creciente estima, que avanza paralela a la que se siente por la democracia y por la república, no hará sino incrementarse hasta hacer del federalismo y de la República federal —*la federal*, como era popularmente conocida— uno de los grandes mitos del XIX español. La revista barcelonesa *La Flaca* llegará a decir que la «federación es a la República lo que el sello a los documentos de crédito». Es más, según el *Diario de Barcelona*, «federal» es sinónimo de republicano verdadero (Battaner, 424 y 425).

Más específicamente venía a entenderse por federalismo «un pacto por el cual pueblos completamente autónomos se unen y crean un poder que defienda sus comunes intereses y sus comunes derechos», de acuerdo con la definición dada por Pi y Margall. En definitiva, el concepto se relacionaba con la autonomía de los individuos y de las entidades territoriales de diferente tamaño. Para Orense, «el gobierno federal es el Gobierno de las provincias por las provincias» o, lo que es lo mismo, «el gobierno del pueblo por el pueblo». De este modo, el federalismo pasaba a monopolizar la lucha por el municipalismo que desde mucho antes había movilizó al progresismo y luego a demócratas y republicanos. Obviamente, el documento en el que mejor queda reflejado el programa del federalismo español en esos momentos fue el proyecto de Constitución republicana redactado por las Cortes, que en su sesión inaugural del 1 de junio de 1873 aprobaron, por amplia mayoría, una declaración afirmando el carácter federal de la República española. Uno de los motivos principales por los que el nuevo régimen fracasó fue precisamente por el acoso que la Primera República sufrió por parte del movimiento cantonal, que pretendió imponer por la vía de los hechos consumados los principios teóricos del sistema federal. El ingrediente localista se volvió, pues, contra los propios gobernantes de la República federal, endosándoles además una pesadísima carga de connotaciones negativas para el futuro. Debido a ello, la República, y muy especialmente el federalismo, pasó a ser sinónimo de subversión, revuelta, desorden, desintegración territorial, caos y anarquía. Una herencia de la que tardaría en desprenderse, si es que llegó a conseguirlo.

Al iniciarse la Restauración, por tanto, el federalismo era visto por sus adversarios como una especie de monstruo a desterrar del nuevo sistema. Si Sagasta lo había asociado ya en 1869 al comunismo y a la Internacional, los conservadores

lo verán como una amenaza permanente al orden, a la unidad nacional y a la Constitución (monárquica). Sin embargo, el federalismo volverá a florecer en los años ochenta con renovada energía en el campo de la teoría y de la organización práctica. En Cataluña seguirá siendo la corriente dominante del republicanismo. En el mundo urbano será durante algún tiempo la ideología con mayor capacidad de movilización social y de arrastre entre el mundo obrero. En el campo, merced a su relación con el sindicalismo agrario, el federalismo se mantendrá igualmente presente (Duarte y Gabriel, 2000). Su espacio social y político tenderá a coincidir con el del socialismo, el del anarcosindicalismo y el de las nuevas formulaciones del republicanismo radical y populista, que, con Lerroux y Blasco Ibáñez, arraigará con fuerza en Cataluña y Valencia. Además deberá enfrentarse a los incipientes nacionalismos periféricos. El auge del regionalismo desde los años noventa significará también el progresivo debilitamiento de un federalismo que al iniciarse el siglo XX estaba ya en franca descomposición. Si en el País Vasco el fuerismo siempre había marginado al federalismo (pese a los intentos de los primeros republicanos vascos por reinterpretar los fueros en clave federalista: Fernández Sebastián, 1988), en Cataluña el catalanismo y otros movimientos regionalistas-autonomistas irán llenando el campo de las propuestas descentralizadoras antaño dominado por los federales.

Curiosamente, el siglo XX iba a suponer la apertura de un horizonte europeo que de alguna forma apuntaba hacia el federalismo. En España, el Estado autonómico creado tras la muerte de Franco será considerado incluso federal por algunos constitucionalistas, sin faltar algunas voces que desde la izquierda del espectro político encuentren en una organización federal del Estado la solución a los seculares problemas de vertebración territorial.

Véase también: AUTONOMÍA, FUEROS, INTERNACIONALISMO, JUNTAS, NACIÓN, REGIONALISMO, REPÚBLICA.

FEUDALISMO

Juan Francisco Fuentes

Es uno de los pocos *ismos* sociales o políticos anteriores a la Revolución liberal. En el pensamiento ilustrado y en el liberalismo temprano, *feudal/feudalismo* llegó a formar una poderosa tríada con *fanatismo* y *despotismo* en la crítica al Antiguo Régimen; si las dos últimas voces correspondían, respectivamente, a la vertiente religiosa y política de su naturaleza represiva, el concepto de feudalismo

Javier Fernández Sebastián
Juan Francisco Fuentes (dirs.)

Diccionario político y social del siglo XIX español

Con la colaboración de:

Óscar Álvarez Gila, Javier Ayzagar, Jordi Canal, Gonzalo Capellán de Miguel,
Pedro José Chacón Delgado, María Antonia Fernández, Ignacio Fernández Sarasola,
Carmen García Monerris, Carlos Garriga, Albert Ghanime, Jean-Louis Guereña,
Emilio La Parra López, Manuel Lucena Giraldo, Manuel Lucena Salmoral,
Gorka Martín Arranz, Agustín Martínez de las Heras, Fernando Martínez
Pérez, María Cruz Mina, Juan Olabarría Agra, José María Ortiz de Orruño,
Benoît Pellistrandi, José María Portillo Valdés, María Cruz Romeo Mateo, Coro
Rubio Pobes y Rafael Ruzafa

Alianza Editorial